

Imprimir

A finales del mes de junio del año 2022, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, entregó parte de los informes que fueron el resultado en largos meses de trabajo, no pocas veces, lleno de obstáculos e inconsecuencias, especialmente de agentes estatales que desde el gobierno, en este caso de Iván Duque, se dedicaron a poner trabas que dificultaron el trabajo de los comisionados, a lo que se sumó sin duda alguna, una terrible crisis humanitaria desatada por la pandemia COVID 19. De esta manera cabe la menor duda del impacto y la importancia que para un país que intenta salir de una larga y dolorosa guerra, implica que se conozcan los relatos que intentan explicar desde nuevas perspectivas los profundos y dolorosos impactos de esta guerra que ha afectado a Colombia.

El informe, es el resultado de un arduo trabajo, de la comisión y sus equipos, que, contra viento y marea, escucharon centenares de testimonios de víctimas, actores intervinientes en el conflicto armado, gobernantes entre otras muchas voces. Parte de ese ejercicio se ha venido dando conocer a través de la publicación de los distintos tomos que hacen parte y del informe de la comisión de esclarecimiento de la verdad, uno de los cuales es el denominado hallazgos y recomendaciones, a través del cual se sintetizan las múltiples afectaciones que ha sufrido el país en esos largos años de conflicto armado, y frente al cual este informe debiera contribuir para que conjunto de la sociedad colombiana conozca los impactos de ese hecho doloroso y se permita la oportunidad a construir una sociedad libre de uso de las armas para resolver las diferencias sociales y políticas.

Bajo el título acertado “Hay futuro sí, hay verdad” la comisión reitera lo que es parte de la esperanza, no solamente de la víctimas del conflicto armado, sino en general de la sociedad colombiana, que durante muchos años ha sido víctima de la desinformación, la manipulación de los hechos y en todo caso de un ocultamiento de la realidad social, política y económica que entrañan prácticas de exclusión, violencia y miedo, justificadas todas para crear, ampliar, o sostener privilegios ostentados por pequeños círculos de poder.

Uno de esos informes denominado “hallazgos y recomendaciones” es un relato que intenta hacer una radiografía de lo que significó y significa, para el país este conflicto armado, empezando por reconocer el impacto doloroso y las heridas que deja este en toda la sociedad

Colombiana, para luego establecer como horizonte posible, la democracia sin violencia, para seguir luego describiendo las características de la violencia según los distintos actores armados, fuerza pública, grupos insurgentes, paramilitares, narcotráfico e incluso las doctrinas adoptadas por el Estado colombiano, un capítulo se dedica a valorar el impacto de la violencia en los territorios refiriendo a la desigualdad económica, los impactos del narcotráfico y las disputas políticas por el control de territorio, también se describen en un capítulo los impactos que en la cultura ha tenido la violencia así como, un capítulo dedicado a la necesidad de reconocimiento en las posibilidades de los distintos actores de estos hechos de violencia y también un capítulo se ocupa de los impactos en el relacionamiento internacional de nuestro conflicto.

En una segunda parte de este volumen, se refiere a las recomendaciones que la comisión considera necesario tener en cuenta para la superación del conflicto y la construcción de la paz. Entre ellas la garantía de la reparación, la memoria y la dignificación de las víctimas. Igualmente, la recomendación a fortalecer la democracia incluyente y participativa, encarar la discusión sobre problema de las drogas de uso ilícito, así como, políticas eficaces para enfrentar el grave problema de la corrupción, mejorar el acceso a la justicia, adopción de una nueva concepción de seguridad, la construcción de una nueva noción de paz territorial y una cultural para la paz. Finaliza este volumen con referencias sobre legado de la Comisión y la necesidad de fortalecer los procesos de pedagogía del informe.

El primer capítulo de este volumen sobre los “Hallazgos y las recomendaciones” hace referencia a las heridas que ha dejado en el conjunto de la sociedad, indicando que se trata de un “impacto masivo e intolerable”, haciendo referencia especial a la negación de la existencia de las víctimas, reconocimiento a la ausencia del Estado y a la existencia de un conflicto que inicialmente se situó en las zonas marginales del país. En este primer capítulo se refiere entonces a una guerra de múltiples entramados políticos y económicos en los que incluso participan actores armados movidos en muchas de las ocasiones en una disputa por el poder de la tierra que confiere distintos tipos de estatus.

En este capítulo se relatan distintas modalidades y formas en las que la violencia irrumpió, y

también se entenderán algunas de las causas que explican el desarrollo de esa guerra en el territorio, destacándose de control territorial como el narcotráfico, el lavado de activos, y el despojo de tierras, señalando el informe que se trata de aproximadamente 8 millones hectáreas que han sido despojadas a las comunidades a lo largo y ancho del país. Igualmente se reconoce como las políticas institucionales de seguridad que minaron convirtiendo la lucha por los derechos en acciones bajo sospecha y objeto de persecución por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que en últimas se tradujo en una gran “apatía a lo institucional” y en todo caso una profunda desconfianza de la ciudadanía en el gobierno.

Reconoce el informe de entonces que una estrategia para negar la existencia de conflicto y sus impactos la sociedad, fueron las recurrentes alusiones al “triunfo” de la institucionalidad sobre la insurgencia, el negacionismo como forma de discurso oficial y siempre las alusiones a la lucha contra la impunidad especialmente sí se trataba de los hechos cometidos por las insurgencias.

El capítulo entonces hace referencias a lo que implicó para las víctimas, su desconocimiento, a pesar de que estas impulsaron acciones de movilización y acciones por su reconocimiento y resistencia. Se trata en todo caso en este capítulo de un reconocimiento de lo que ha sido la ausencia de políticas eficaces para que de manera efectiva se atienda a las víctimas de conflicto armado y cómo dicha ausencia de política, se tradujo en sufrimiento humillación, trauma y desesperanza.

Reconoce el informe el papel que juega la memoria y la violencia, memoria que muchas veces ha sido parte del proceso resiliente en las propias víctimas a las cuales el Estado no se les ha brindado la adecuada atención y el suficiente apoyo para que través de éste se logre superar el dolor y la violencia. La política pública para las víctimas ha sido limitada y manifiesta múltiples dilaciones lo cual crea la sensación de una “paz esquiva”. No obstante, esa memoria juega el papel en la reconstrucción de la esperanza siempre teniendo en cuenta que la violencia no es solamente un hecho del pasado, sino que hace parte del presente, por cuanto se trata de una violencia no superada.

Es importante destacar que el informe refiere como una de las mayores afectaciones colectivas de la violencia en la social el problema de la salud mental, que ha conllevado a una naturalización, normalización de la violencia que en todo caso deshumaniza, y peligrosamente puede convertirse en un círculo vicioso que es necesario superar para que de manera efectiva se logre superar esa etapa de violencia que tanto daño ha causado a muchas generaciones en el país.

Un aspecto no menos importante, es el reconocimiento que hace a la naturaleza como víctima del conflicto armado, destacando que ella es fuente de vida, pero también es el lugar del relacionamiento y la identidad de las comunidades que en ella conviven. De esta manera se describen las múltiples formas en las que la guerra ha puesto un riesgo la naturaleza, indicando la necesidad de que se reconozca este daño para desarrollar las acciones que permitan la reparación a la misma.

Finalmente, el informe hace un llamado para que dé conjunto, se construya una nueva ética, a partir de “acuerdos mínimos”, y del compromiso para respetarlos, teniendo como un principio la solidaridad, tan necesaria a la hora de afrontar las dificultades que como sociedad tenemos, esta nueva ética debe sustentadas en el repudio a toda expresión de justifique, estimule y promueva la guerra. Se trata en los términos de la comisión de forjar la paz sustentada en ejercicios de reconciliación.

En todo caso es muy importante seguir trabajando en estudio de los informes en el entendido que la verdad, no se reduce a la reconstrucción de relatos, que escriben de manera descarnada, como se presentó el conflicto, tampoco es suficiente con que describan como se comportaron distintos actores armados en ese conflicto, habrá necesidad de auscultar a partir de este informe de la comisión de esclarecimiento, y nuevos relatos elaborados por las propias víctimas las organizaciones y sus comunidades, pero sobre todo hay que dimensionar de mejor manera, los distintos grados de responsabilidad que distintos actores tuvieron en el desarrollo de conflicto y particularmente la necesidad de reconocer que cuando un Estado acude de manera sistemática, al uso de la violencia, pobreza, la exclusión, el negacionismo, la impunidad y el miedo como formas de gobierno, la consecuencia lógica, es el surgimiento

de formas de rebeldía, lucha y confrontación, que buscan cambiar tal realidad.

Alfonso Castillo, Defensor de los Derechos Humanos

Foto tomada de: El Colombiano